



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

PROCESO	Ejecutivo
DEMANDANTE	ABOCOL LTDA.
DEMANDADO	Corporación para el Desarrollo Social GINAGUS
PROCEDENCIA	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí
CUDR	05360-31-03-002-2012-00431-04
RADICADO INTERNO	103-22
PROVIDENCIA	065-23
DECISIÓN	No puede confundirse la oposición a la entrega dispuesta en el artículo 309 del C.G.P. con la prevista en el artículo 456 Ib., en el que expresamente se señala que cuando la entrega del bien deviene de adjudicación dada en remate, no es admisible oposición alguna. CONFIRMA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por el apoderado de las señoras María Eugenia Tabares Ramírez y Aidé Amparo Vásquez frente a la decisión por medio de la cual se rechazó de plano la oposición a la entrega del bien inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria número 001-921287, ubicado en la calle 36 Nro. 63-70, Torre 2, Apto. 701, Urbanización Bosque de La Sierra P.H., proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. ABOCOL LTDA. presentó demanda ejecutiva en contra de la Corporación para el Desarrollo Social GINAGUS, pretendiendo el pago de unas obligaciones contenidas en unos pagarés.

2.- Trámite. Después de surtidas todas las etapas procesales pertinentes del proceso de ejecución y llevado a cabo la diligencia de remate de los bienes embargados y secuestrados de propiedad de la ejecutada dentro del presente

asunto, el juzgado de conocimiento mediante auto del nueve de diciembre de 2014, aprobó la adjudicación efectuada el seis de noviembre de la misma anualidad y dispuso la entrega, entre otros, del inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria número 001-921287, ubicado en la calle 36 Nro. 63-70, Apto. 701, Urbanización Bosque de La Sierra P.H., a su adjudicatario ABOCOL LTDA.

Ante las notas devolutivas de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, el auto aprobatorio de la adjudicación fue adicionado en proveídos del 12 de marzo de 2019 y 6 de agosto de la misma anualidad.

Como no fue posible la entrega del citado bien inmueble por parte de la secuestre designada, tal y como lo manifestó es escrito del ocho de agosto de 2019, el 26 de agosto del mismo año, se expidió el despacho comisorio número 043/431/2012, con destino a la Alcaldía Municipal de Itagüí, Secretaría de Gobierno -Dirección Administrativa Autoridad Especial de Policía-, para que llevara a cabo la diligencia de entrega a la sociedad ABOCOL LTDA., entre otros, del predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-921287.

La mencionada diligencia se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2019, por parte de la Dirección Administrativa Autoridad Especial de Policía Integridad Urbanística de Itagüí, encontrándose el apartamento ocupado por la señora Ayde Amparo Velásquez Saldarriaga, quien por intermedio de apoderado judicial manifestó que se oponía a dicha diligencia, en términos generales porque el comisionado no tenía competencia jurisdiccional ni administrativa para llevar a cabo la diligencia entrega ordenada por el comitente. En consecuencia, solicitó la devolución de la comisión al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, de manera que sea ese despacho el que le resuelva la oposición alegada, lo que en efecto sucedió mediante oficio número 084 del 18 de febrero de 2021.

Por proveído del 19 de noviembre de 2021 (PDF.15AutoResuelveDespachoComisorio2012-431), el juzgado de primera instancia advirtió que la comisión no había sido cumplida en su totalidad, pues la entrega de los bienes no se había realizado de manera efectiva por el comisionado, toda vez que no admitía ninguna oposición. En consecuencia,

ordenó la devolución del despacho comisorio, de manera que la Inspección comisionado cumpliera con la diligencia encomendada.

3.- La apelación. El vocero judicial de las opositoras interpuso recurso de apelación, y en subsidio de apelación (PDF.16MemorialRecursoReposición), manifestando que la providencia del 19 de noviembre de 2021, no resuelve de fondo la oposición presentada, en su calidad de poseedoras del bien inmueble con matrícula inmobiliaria número 001-921287.

Dijo que, como prueba sumaria de su posesión, se adelantan procesos de pertenencia a favor de María Eugenia Tabares Ramírez y Aidé Amparo Vásquez Saldarriaga, así mismo, proceso reivindicatorio en contra de la primera, formulado por la señora Nora Leyda Arias de Molina.

Resaltó que el artículo 309 del C. General del Proceso, establece que puede oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hecho constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre, lo cual se contradice con lo dispuesto por el juzgado de primera instancia cuando advirtió que no admite oposición.

Expuso que, en sentencia de acción de tutela, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, MP. José Gildardo Ramírez Giraldo, se determinó que las accionantes podían presentar oposición en la diligencia conforme lo establece el artículo 456 del C. General del Proceso, en concordancia con el artículo 308 ibídem, destacando que la decisión que allí llegue a adoptarse, era susceptible de alzada.

Refirió que, con la decisión emitida el 19 de noviembre de 2021, se está contrariando una oportunidad que el Tribunal de instancia en tutela concedió a las ahora opositoras.

Manifestó que se les estaba negando de tajo y cercenando en el proveído atacado, el derecho que les corresponde interponer en su beneficio de personas que no han querido participar en los procesos de pertenencia que han iniciado, con el fin de dilucidar la propiedad del inmueble señalado.

Adujo que la advertencia de no admisión de oposición, vulnera el derecho al acceso a la justicia, igualdad, debido proceso, interponer recursos de ley, entre otros derechos, fundamentales y constitucionales de las señoras María Eugenia Tabares Ramírez y Ayde Amparo Vásquez Saldarriaga.

En consecuencia, deprecó que se le diera trámite a la oposición a la diligencia de entrega realizada el 19 de noviembre de 2019, y se suspenda todo acto de entrega de los bienes inmuebles de los cuales son poseedoras las opositoras.

4.- Decisión de la reposición. En proveído del ocho de marzo de 2022, el Juzgado de primera instancia mantuvo incólume la decisión cuestionada, aduciendo que la ley procesal civil prohíbe las oposiciones a las diligencias de entrega de los bienes rematados o adjudicados, auto aclarado por auto del 24 de agosto de 2022. En consecuencia, concedió la alzada propuesta de manera subsidiaria, en el efecto devolutivo. (fl.PDF.29.AutoResuelveRecursoReposiciónDespachoComisorio2012-431).

CONSIDERACIONES

1.- El artículo 456 del Código General del Proceso consagra: *“Entrega del bien rematado. Si el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, el rematante deberá solicitar que el juez se los entregue, en cuyo caso la diligencia deberá efectuarse en un plazo no mayor a quince (15) días después de la solicitud. En este último evento no se admitirán en la diligencia de entrega oposiciones, ni será procedente alegar derecho de retención por la indemnización que le corresponda al secuestre en razón de lo dispuesto en el artículo 2259 del Código Civil, la que será pagada con el producto del remate, antes de entregarlo a las partes”.*

Conforme a la mencionada norma, el secuestre debe entregar el bien rematado a más tardar dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación; si este no entrega, lo hará el juez en un plazo no mayor a quince días, después de la solicitud en tal sentido y no debe admitir oposición de ninguna especie, necesariamente porque la detentación del bien objeto de cautela a cargo del secuestre, es a título de mera tenencia.

Es decir, como el bien está embargado y secuestrado dentro del proceso ejecutivo, esto es, se encuentra aprehendido por el juzgado que conoce la acción, refulge improcedente que cuando se proceda a su entrega luego de su subasta, se alegue por un tercero ajeno al proceso la posesión del mismo.

2.- Caso concreto. En el sub lite, las señoras María Eugenia Tabares Ramírez y Ayde Amparo Vásquez Saldarriaga, censuraron vía apelación el auto proferido el 19 de noviembre de 2021, a través del cual se rechazó de plano la oposición por ellas presentada, a la entrega del bien distinguido con matrícula inmobiliaria número 001-921287, ubicado en la calle 36 Nro. 63-70, Torre 2, Apto. 701, Urbanización Bosque de La Sierra P.H., proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí.

Del expediente digital allegado por el juzgado de primer grado, se desprende que el mencionado predio fue subastado y adjudicado el seis de noviembre de 2014 a la sociedad ABOCOL LTDA. Esta adjudicación fue aprobada mediante providencia del nueve de diciembre de la misma anualidad, donde además de disponer el levantamiento del embargo y secuestro de dicho bien, se ordenó su entrega al adjudicatario rematante, por intermedio de la auxiliar de la justicia (fl.20PDF.05360310300220120043100-C001(02) (011), 01DemandaFísicaEscaneada1-300).

Como no fue posible la entrega del citado bien inmueble por parte de la secuestre designada, se expidió el despacho comisorio número 043/431/2012 para tal efecto. La mencionada diligencia se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2019, por parte de la Dirección Administrativa Autoridad Especial de Policía Integridad Urbanística de Itagüí, encontrándose el apartamento ocupado por la señora Ayde Amparo Velásquez Saldarriaga, quien por intermedio de apoderado judicial manifestó que se oponía a dicha diligencia, por lo que devolvió la comisión al comitente, el que, se repite, la rechazó de plano, advirtiéndole que contra dicha entrega no procedía ninguna oposición.

Y en efecto, como lo señaló el juzgado de primer grado, conforme lo dispone el artículo 456 del C. General del Proceso, cuando la entrega del bien deviene de adjudicación dada en remate, no es admisible oposición alguna, tal y como se anotó en las consideraciones, pues así lo impide dicha normativa.

En relación con la mencionada prohibición, destacó el Tribunal Superior de Bogotá en auto del 28 de julio de 2005, MP. Rodolfo Arciniegas Cuadros, que:

“...La razón de ser de dicha disposición salta a la vista: si un bien está embargado y secuestrado en un proceso ejecutivo, esto es, se encuentra aprehendido material y jurídicamente por el juzgado que conoce la acción, no resulta viable que cuando se proceda a su entrega, al finalizar el proceso, se alegue por un tercero ajeno a la Litis la posesión del bien, ya que la tenencia del mismo así como su posesión estaban siendo ejercidas por el aparato jurisdiccional, por medio de un auxiliar de la justicia (secuestre)...”

Es que, la ley quiso que después de consumado el secuestro de determinado bien, quede clausurada o cerrada la posibilidad de disputar la posesión materia sobre el mismo. En otras palabras, si la oposición no fue formulada al momento de comenzar el trámite procesal de ejecución, mucho menos puede alegarse con posterioridad, al momento de su culminación.

Bajo este presupuesto, si el predio rematado fue objeto de secuestro el 14 de mayo de 2013 (C02MedidasCautelares, 16, 01MedidasFísicasEscaneadasFolio1-380, 050360310300220120043100_C002(016), y en la diligencia se encontró vacío, y además, en el informe de la auxiliar de la justicia allegado al expediente el 14 de mayo de 2014 ((C02MedidasCautelares, 16, 01MedidasFísicasEscaneadasFolio1-380, 050360310300220120043100_C002(017), certificó que aún se encontraba desocupado, no pueden las ahora opositoras aprovecharse de la diligencia de entrega practicada como consecuencia del remate, para pedir que les reconozca la calidad de poseedoras.

Así, para la Sala, se imponía el rechazo de plano de la oposición, dado que en este momento procesal ya no se permite discutir la posesión del bien rematado, por lo que habrá de confirmarse el auto apelado.

De otro lado, no sobra advertir que, de acuerdo con el trámite procesal, la señora María Eugenia Tabares Ramírez, presentó incidente de oposición a la diligencia de secuestro (C03IncidenteOposiciónSecuestro, 09IncidenteMariaEugeniaTabares-RECHAZADO), el cual fue rechazado desde el siete de octubre de 2013 (24TrámiteIncidenteEscaneado1-487), esto es, que su situación de poseedora ya se encuentra definida en este asunto desde hace casi diez años.

Al tenor de lo establecido en el precepto 365, numeral 1º del Código General del Proceso, se condenará a las apelantes al pago de las costas causadas en esta instancia, a favor de la sociedad demandante. Conforme el artículo 5º, numeral 4. del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho se fijará la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.00), que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **CONFIRMA** el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, el 19 de noviembre de 2021, que rechazó de plano la oposición a la entrega del bien inmueble adjudicado en remate, distinguido con matrícula inmobiliaria número 001-921287, ubicado en la calle 36 Nro. 63-70, Torre 2, Apto. 701, Urbanización Bosque de La Sierra P.H., al interior del proceso Ejecutivo instaurado por ABOCOL LTDA. en contra de la Corporación para el Desarrollo Social GINAGUS.

Se condena a las terceras interesadas, señoras María Eugenia Tabares Ramírez y Aidé Amparo Vásquez, al pago de las costas causadas en esta instancia, a favor de la demandante, ABOGADOS Y COBROS LTDA. "ABOCOL LTDA.". Conforme el artículo 5º, numeral 4. del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho se fijará la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.00), que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022